



Proceso	Verbal
Demandante	María Luz Fanny gallego Gómez
Demandado	Colombiana de Transporte de Carga S.A.S. y O.
Radicado	05001-31-03-008-2020-00006-01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 039
Decisión	Confirma
Tema	Requisitos que se deben cumplir para que se entienda surtida la notificación por correo electrónico. Interrupción del término previsto para cumplir con la carga omitida. Jurisprudencia.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), veintinueve de marzo de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 13 de julio de 2022, por el **JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**, mediante el cual dio por terminado el proceso por desistimiento tácito frente a la codemandada sociedad AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S.A.S., en el

proceso Verbal promovido por **MARÍA LUZ FANNY GALLEGO GÓMEZ** en contra de la **AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S.A.S., COLOMBIANA DE TRANSPORTE DE CARGA S.A.S., CT CARGA S.A.S., EMILIO JOSÉ GARCÍA MENESES y ALLIANZ SEGUROS S.A.**

II. ANTECEDENTES

Por auto del 13 de julio de 2022, el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN, aceptó el desistimiento de las pretensiones de la demanda frente al codemandado señor EMILIO JOSE GARCIA MENESES y dio por terminado el proceso por desistimiento tácito con relación a la demandada sociedad AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S.A.S., porque no satisfizo la carga de integrar el contradictorio realizando las notificaciones faltantes del auto admisorio de la demanda, dentro del término de 30 días, como se dispuso en providencia del 6 de mayo de 2022; a pesar de que en memorial allegado por correo electrónico el 30 de junio de 2022, la parte demandante desistió de las pretensiones de la demanda en cuanto a Emilio José García Meneses, no se pronunció frente a la notificación de la demandada AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S.A.S. NIVEL 2, desatendiendo el requerimiento del Despacho. En esta providencia repuso el auto del 19 de noviembre de 2021, dejando sin efecto la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Precisa que las notificaciones que acreditó haber remitido por mensaje de datos desde el 16 de diciembre de 2020, a las demandadas COLOMBIANA DE TRANSPORTES, SEGUROS

ALLIANZ S. A. y AGENCIA DE ADUANAS NACIONALES, no se compadece con lo dispuesto en el inciso 3° del art. 8° del Decreto 806 de 2020, conforme a la exequibilidad condicionada de la Sentencia C-420 de 2020, tanto que esta dispuso que el término previsto en la norma *"empezará a contarse cuando el iniciador recepción de acuse de recibo o se pruebe por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje"*.

A pesar de que las demandadas COLOMBIANA DE TRANSPORTES y SEGUROS ALLIANZA S. A. se hicieron parte en el proceso, no ocurrió lo mismo con la AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S.A.S. porque pese a que el envío de la notificación se realizó al correo electrónico info@nacionaladuaneraltda.com, solo se limita a la constancia de remisión junto con los anexos, pero no existe acuse de recibo ni prueba de acceso del destinatario al mensaje, como garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso, como lo dispone la sentencia de constitucionalidad y, pese a que se le requirió en dos oportunidades no atendió al llamado de gestionar las notificaciones de los demandados faltantes por integrar, para concluir que frente a esta demandada no se ha dado cumplimiento al auto del pasado 6 de mayo de 2022 y como no se cumplió con la carga, procede a la terminación del proceso por desistimiento tácito frente a la sociedad AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S. A. S., sin que haya lugar a la terminación del proceso frente a las sociedades COLOMBIANA DE TRANSPORTE DE CARGAS S.A.S. y ALLIANZ SEGUROS S. A. porque ya están vinculados al proceso.

En escrito allegado por correo el 21 de julio del año anterior, la parte demandante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra la anterior decisión, soportado en los siguientes argumentos: En providencia del 4 de mayo de 2022, fue requerido para que cumpliera con la carga procesal de vincular a la codemandada Agencia de Aduanas, el término de 30 días para cumplir con esta carga venció el 22 de junio de 2022, advirtiendo que *"... cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos ..."*. El 17 de junio de 2022, el apoderado de Contracargas S.A.S. elevó una solicitud al despacho, acto que alargó el período para cumplir con la carga impuesta hasta el 04 de agosto de 2022; en junio 30, allegó al despacho memorial de 8 folios, acto que amplió el plazo hasta el martes 16 de agosto de 2022; advirtiendo que a todas luces aparece que la providencia fustigada es abiertamente precipitada y que apegados a la norma, el Despacho ha debido esperar hasta el miércoles 17 de agosto para verificar el cumplimiento de la carga impuesta. Desde diciembre de 2019, presentó la demanda, en el ítem de notificaciones informó la dirección electrónica de la agencia de Aduanas S.A.S. y que reposa en el Certificado de Existencia y representación (info@nacionaladuaneraltda.com); para el juzgado es claro que desde el 16 de diciembre de 2020 se envió a esa dirección electrónica copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, notificación que efectuó desde su correo electrónico que informó desde la presentación de la demanda y coincide con la registrado en el SIRNA, constancia que hizo llegar al correo del juzgado (ccto08me@cendoj.ramajudicial.gov.co) el 17 de diciembre del 2020, recibió respuesta del Despacho el 12 de enero de

2021; notificación que está contenida en los memoriales enviados al Juzgado el 17 de noviembre de 2022; el despacho confunde dos situaciones diferentes a las que alude el Decreto 806 de 2020; una cosa es cuando se entiende la notificación vía electrónica y, otra muy diferente, es a partir de cuándo despunta el término de traslado de la demanda; para el primer evento, la notificación queda surtida una vez se deposita en el buzón electrónico del destinatario la demanda, los anexos y auto admisorio (Decreto 806 artículo 8 primer inciso y jurisprudencia Corte Suprema), momento que puede coincidir con el enteramiento del contenido del mensaje enviado y sus archivos adjuntos o puede no coincidir, precisando que puede ocurrir que el destinatario por cualquier razón nunca abra su buzón para enterarse, lo que es poco probable con la demandada por estar dedicada al comercio; lo que conlleva a colegir no solo que la parte está notificada, sino que el término para contestar la demanda se encuentra superado con creces; precisa que como la ley comercial exige ese correo para todo tipo de notificaciones, incluyendo las jurídicas, presumiéndose de derecho que cualquier comunicación enviada allí ha sido recibida por el destinatario, indica que resulta descabellado exigir a un despacho judicial, que acredite que el iniciador acuse recibo o que allegue constancia de que recibió el correo, cuando dicha prueba salta de bulto con el pantallazo del envío. Precisa que la exequibilidad condicionada de la sentencia C-420 de 2020, en el sentido de que empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso del destinatario del mensaje, refiere al momento que despunta el término de traslado. Incluso, cita en extenso, jurisprudencia del Tribunal de Casación.

Precisa a continuación, que si el despacho se aparta de las anteriores consideraciones y citas jurisprudenciales, solicita se dirija a la mesa de ayuda "*correo electrónico del Consejo Superior de la Judicatura*" para que informe lo que solicita a continuación.

Finalmente, afirma que decretar el desistimiento tácito a pesar de que efectivamente notificó a la codemandada Agencia de Aduanas como lo ha venido precisando y prueba con los múltiples pantallazos enviados al Juzgado, implica la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, del debido proceso, buena fe y lealtad procesal.

El Juzgado, luego de transcribir apartes sobre el desistimiento tácito que regula el art. 317 del C. General del proceso, en torno a la regla que consagra la interrupción por cualquier actuación, advierte que su entendimiento ha originado bastante debate, desde quienes sostienen que cualquier actuación, sin tener en consideración si se dio cumplimiento a la carga es suficiente para generar la interrupción, mientras otra posición sostiene que esa actuación, de oficio o a petición de parte, debe estar dirigida a impulsar el proceso. Indica que la finalidad de la norma no es otra, que instar a las partes a que se continúe con el trámite del proceso y si no se cumple con la carga se procede con la sanción.

Con ese soporte, indica que las alegaciones de interrupción del término para cumplir con la carga de notificación a la demandada Agencias de Aduanas, con la solicitud que elevó el

apoderado de COLOMBIANA DE TRANSPORTE DE CARGA SAS, el 17 de junio de 2002, para que se hiciera un control de legalidad, en nada incide para la paralización del plazo concedido, pues se torna como una simple solicitud sin propósitos serios de solución de la controversia; más aún cuando la solicitud se despachó desfavorablemente en providencia del 13 de julio de 2002; precisando que como lo indica el recurrente, el término para acreditar la notificación feneció el 22 de junio de 2022, sin que se allegará prueba de su realización; por lo que la solicitud del demandante del 30 de junio de 2022, tampoco logró su cometido en cuanto a la interrupción del cómputo del término.

En cuanto a las afirmaciones sobre el intento de notificación realizado por la parte demandante el 16 de diciembre de 2020, a la demandada Aduanas Nacional Aduanero S.A.S., remitida al correo electrónico info@nacionaladuaneraltda.com, advierte que en la providencia que es objeto de reparo, indicó que no se encontraba en armonía con el Decreto 806 de 2020 y la Sentencia C-420 de 2020; reiterando como lo expuso en el auto que dio por terminado el proceso por desistimiento tácito, que el juzgado en momento alguno dio valor a esa notificación, estimando conveniente diferenciar que una cosa es el “*envió*” del mensaje de datos, actividad que normalmente está en cabeza de la parte demandante o interesada en la notificación y, otra cosa, es la “*recepción*” de dicho mensaje por parte del demandado; precisando frente al recibo de la notificación por mensaje de datos, que la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, al estudiar la exequibilidad de la preceptiva, la condicionó a que el iniciador recepcione acuse de recibo o se pruebe por otro medio

constatar el acceso del destinatario al mensaje, lo que no ocurrió en el presente tramite de notificación porque la parte demandante se limitó a exponer la constancia del envío; advirtiéndole que lo que se debe demostrar o constatar es que al buzón de correo electrónico de destino ha ingresado el mensaje, y no el envío del mensaje de datos, razones para que el Juzgado no le diera valor a la notificación remitida.

A manera de ilustración advierte que los correos electrónicos de los diferentes dominios que existen por Outlook y g-mail se pueden programar para prestar este servicio de confirmación de entrega; que el envío también se puede realizar por medio de las empresas postales, que igualmente certifican la entrega al buzón de correo electrónico destinado; que cualquiera de estas constancias expedidas por el servidor del correo electrónico, están dispuestas por el legislador para demostrar que el mensaje se remitió satisfactoriamente y se puede probar por cualquier medio de convicción pertinente, sin que sea necesario el *"acuse de recibido"*.

En cuanto a la solicitud para que se oficie a la mesa de ayuda correo electrónico del Consejo Superior de la Judicatura, para que suministre la información indicada, la estima improcedente porque es una institución exclusiva interna de la rama judicial, que en nada podría certificar el envío desde el correo electrónico personal del apoderado al buzón de la sociedad demandada, pues lo que podría certificar sería frente a correos institucionales únicamente de la rama judicial y, es innecesaria toda vez que en ninguna instancia se está en discusión si se recibió o no, el correo enviado el 17 de

diciembre de 2020; es más, del mismo, se dio acuse de recibo por parte de la Secretaria del Despacho.

Con este soporte, negó la reposición y, subsidiariamente, concedió el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

Se trata de establecer si en la notificación por correo electrónico o mensaje de datos, basta con su envío o remisión para que se entienda surtida, sin que se tenga que acreditar que el iniciador acuse recibo o que se acredite por otros medios de convicción de que el destinatario recibió el correo.

Al efecto, el art. 8º del decreto 806 de 2020, establece: *"Notificaciones personales: Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*

"El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> "La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

"Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

"Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso".

El art. 291 del C. General del Proceso, al regular la remisión de la comunicación por correo electrónico a quien debe ser notificado, para que comparezca al Juzgado a recibir la notificación, consagra: "Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electrónico. **Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo.** En este caso, se dejará constancia de ello en el expediente y se adjuntará una impresión del mensaje de datos" (negrilla y subrayas fuera de texto).

Por su parte, cuando no es posible realizar la notificación personalmente, se hará por aviso, previendo el inciso 4º del

art. 292 del C. General del Proceso, que “*cuando se conozca la dirección electrónica de quien debe ser notificado, el aviso y la providencia que se notifica podrán remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electrónico. **Se presumirá que el destinatario ha recibido el aviso cuando el iniciador recepcione acuse de recibo.** En ese caso, se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos*” (negrillas y subrayas extra texto).

Sin dificultad se constata que con la expedición del Código General del Proceso, se consagró el correo electrónico, como un medio que se puede utilizar para la realización de las notificaciones; pero, en estos casos, se entiende surtida “*cuando el iniciador recepcione acuse de recibo*”; en cambio, el art. 8º del decreto 806 no estableció expresamente esa exigencia, para luego, indicar que para los fines de esta norma “*se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos*”.

Dadas las consecuencias que conlleva la realización de una notificación, en especial, cuando se trata de la primera que se efectúa en un proceso a quien no está vinculado; con lo cual no solo se puede ver comprometido el derecho de contradicción, sino otros principios de tanta trascendencia, como el de acceso a la justicia y el debido proceso; para solo citar éstos, se ha rodeado este acto de vinculación del máximo de garantías, razón por la cual la jurisprudencia unánimemente ha establecido, que solo se entiende surtida la notificación electrónica cuando el iniciador acuse recibo o se

pruebe por otros medios, que el correo ha sido recibido en el buzón del destinatario; al efecto, ha puntualizado:

"349. Cuarto, la Sala advierte que la disposición sub judice prevé el uso sistemas de confirmación de recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Estos instrumentos brindan mayor seguridad al proceso y ofrecen certeza respecto del recibo de la providencia u acto notificado. En efecto, según lo informado por el CSDJ, dentro de las herramientas colaborativas de Microsoft Office 365 provistas a los servidores judiciales se incluye el servicio de confirmación de entrega y lectura de mensajes. Así, cuando se envía un correo desde la cuenta institucional de la Rama Judicial con solicitud de confirmación de entrega, el servidor de correo de destino responderá inmediata y automáticamente enviando un mensaje informativo al remitente acerca de la recepción del correo. En los casos en que la dirección del correo sea incorrecta o no exista, de manera automática, el servidor, en un periodo máximo de 72 horas, informará sobre la imposibilidad de recepción del correo^[550].

"350. El Consejo de Estado^[551], la Corte Suprema de Justicia^[552] y la Corte Constitucional^[553] coinciden en afirmar que la notificación de las providencias judiciales y los actos administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante la cual se notifica (sea cual fuere el medio elegido para el efecto) sino que resulta indispensable comprobar que el notificado recibió efectivamente tal comunicación. Así, la garantía de publicidad de las providencias solo podrá tenerse por satisfecha con la

demostración de que la notificación ha sido recibida con éxito por su destinatario.

"351. El inciso 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020 prevé que "la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación". Una regla semejante se contiene en el párrafo del artículo 9°, según el cual, "Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente". Al ser consultado sobre las razones que motivaron estos apartados normativos, el Gobierno nacional informó que la medida tiene por objeto conceder un término razonable para que los sujetos procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del reconocimiento de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet^[554]. De esta respuesta no se sigue que, al adoptar la medida, el Gobierno pretendiera desconocer el precedente descrito relativo a la validez de la notificación a partir de su recepción por el destinatario –en el caso de la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, que no de su envío.

"352. No obstante, la Corte encuentra que, tal como fue adoptada la disposición, es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión

notificada o del traslado no corresponde a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación implicaría admitir que, aun en los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío. Una interpretación en este sentido desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución.

"353. Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el régimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta simplificación se admitan interpretaciones que desconozcan la teleología de las notificaciones, esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. A juicio de la Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida que desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales mediante correo electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en el artículo 8°, en tanto provee a los jueces

mayores elementos de juicio para valorar su ocurrencia". (Sentencia C-420/20; Magistrado ponente (E): RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Por su parte, la Sala de Casación Civil, en sede constitucional, ha precisado:

"5. Ahora, en relación con la función que cumple la constancia que acusa recibo de la notificación mediante el uso de un correo electrónico o cualquiera otra tecnología, debe tenerse en cuenta que los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, en concordancia con los preceptos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999, prevén que «...se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo...», esto es, que la respuesta del destinatario indicando la recepción del mensaje de datos hará presumir que lo recibió.

"Sin embargo, de tales normas no se desprende que el denominado «acuse de recibo» constituya el único elemento de prueba conducente y útil para acreditar la recepción de una notificación por medios electrónicos, cual si se tratara de una formalidad ad probationem o tarifa legal -abolida en nuestro ordenamiento con la expedición del Código de Procedimiento Civil-.

"Por consecuencia, la libertad probatoria consagrada en el canon 165 del Código General del Proceso, equivalente al precepto 175 del otrora Código de Procedimiento Civil, igualmente se muestra aplicable en tratándose de la

demostración de una notificación a través de mensajes de datos o medios electrónicos en general, ante la inexistencia de restricción en la materia.

"Es que el principio de libertad probatoria constituye regla general -aplicable a la constancia de recibo de un mensaje de datos-, mientras que la excepción es la solemnidad ad probationem, que, por ende, debe estar clara y expresamente señalada en el ordenamiento, de donde al intérprete le está vedado extraer tarifas no previstas positivamente". (Sentencia de tutela del 3 de junio de 2020. Radicación n.º 11001-02-03-000-2020-01025-00).

No queda duda que al contrario de lo que argumenta el recurrente, cuando se realiza una notificación por correo electrónico, se tiene que acreditar que se recibió en el buzón del destinatario, cometido que se cumple cuando el iniciador acuse recibo o que se acredite por otros medios de convicción como lo tiene precisado la jurisprudencia.

Así mismo, el recurrente argumentó que con unos memoriales que se aportaron al proceso, se interrumpió el término concedido para cumplir con la carga que se le impuso. Sobre el particular, el literal c) del numeral 2. Del art. 317 del C. General del Proceso, puntualiza: *"Cualquier actuación de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo"*.

Una interpretación lata de esta norma, la haría inoperante, porque en efecto cualquier escrito con destino al proceso, así no requiera pronunciamiento, sería suficiente para interrumpir

los términos previstos en la norma, lo que implicaría que se tendrían que contar de nuevo, lo que la haría inoperante sin ningún sentido práctico, de donde la interpretación que más se acomoda es la finalista; en cuyo caso, cuando se requiere a una de las partes para que cumpla con la carga que le incumbe para realizar un acto que está pendiente y con tal propósito se le concede el término de treinta días, la única actuación que tiene la virtualidad de interrumpir el término es la realización del acto omitido para el cual fue requerido. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en sede constitucional, precisando:

“Entonces, dado que el desistimiento tácito» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para que se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

“En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

“Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

“Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

“En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

“Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio.

“Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada (...)” {CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia STC-111912020, del 09 de diciembre de 2020, M.P. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque}.

Sin dificultad se constata que los memoriales presentados por el apoderado de la demandada CONTRACARGAS el 17 de junio de 2022 y, el presentado posteriormente por el demandante, el 30 del mismo mes y año, no tienen la virtualidad de interrumpir el término de treinta (30) días que se concedió a la parte demandante para cumplir con la carga de notificar el auto admisorio de la demanda a la demandada, sociedad AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA S. A. S., término que venció el 22 de junio de 2022, como incluso lo informa y acepta el mismo recurrente, sin que hubiera cumplido con el requerimiento del Juzgado.

Pese a que el demandante afirma que cumplió con la carga de notificar a la demandada desde el 16 de diciembre de 2020, cuando envió a su dirección electrónica la demanda, sus anexos y el auto admisorio, con lo cual surtió la notificación desde su correo electrónico, no se advierte motivo para que no se hubiera pronunciado frente al auto que dispuso el mencionado requerimiento, alegando que ya había cumplido con esa carga, como ahora viene a decirlo; pero, es que además, como lo indicó el Juzgado de primer grado y viene de

dilucidarse, tal notificación no cumple con los requisitos legalmente establecidos como se ha dilucidado, razón por la cual no puede ser tenida en cuenta.

De cara al disenso formulado por el demandante, se advierte que no le asiste razón, lo que es suficiente para que se imponga la confirmación del auto recurrido, sin necesidad de otras consideraciones.

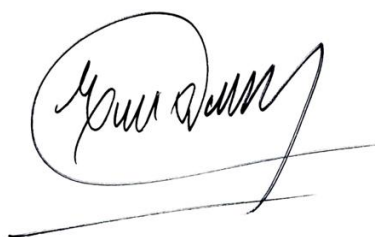
IV. RESOLUCION

A mérito de lo expuesto, **SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN,**

R E S U E L V E

- 1.** Se confirma el auto de fecha y procedencia indicadas, por lo dicho en la parte motiva.
- 2.** Sin costas porque no se causaron.
- 3.** Se ordena devolver la actuación al Juzgado de origen.

COPIESE Y NOTIFIQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marin', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARIN
Magistrado

